

Defensa judicial



13 de septiembre de 2021 al 17 de septiembre 2021

Subdirección de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico

En los regímenes general y especial de pensiones existe libertad probatoria para acreditar condición de beneficiario para sustitución

La Sala Segunda de Revisión de La Corte Constitucional concedió una tutela a una mujer de 85 años de edad que solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) la sustitución de la asignación de retiro de su compañero permanente, con quien convivió por más de 40 años hasta el 2018 cuando falleció.

En tal sentido, y luego de revisar el tema de las barreras administrativas, el alto tribunal le ordenó al Director General de Casur analizar su manual de reconocimiento pensional, con el fin de que se abstenga de imponer estas barreras en el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro.

A su juicio, conforme con el artículo 11 del Decreto 4433 del 2004, para acceder a la sustitución de la asignación de retiro es indispensable ser beneficiario, en calidad de compañera permanente o cónyuge supérstite, y acreditar la convivencia efectiva durante los últimos cinco años previos a la muerte del pensionado.

Entonces, en el marco del reconocimiento de los derechos pensionales tanto del régimen general de pensiones como en el régimen especial de la Policía Nacional, existe libertad probatoria para acreditar la condición de beneficiario en calidad de compañera permanente.

Por ello, la imposición de requisitos o formalidades por parte de una

administradora de pensiones distintas a las exigidas por la ley pensional, con el fin de suspender o diferir el estudio de un reconocimiento pensional, suponen una lesión al debido proceso administrativo (M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar).

Corte Constitucional, Sentencia, T-085, 07/04/2021.

Este es el procedimiento para determinar origen de un accidente de trabajo: Corte Constitucional

Por medio de una tutela, la Corte Constitucional explicó que, cuando una persona afiliada al Sistema General de Riesgos Laborales sufre una contingencia con ocasión o como consecuencia de su trabajo, se genera a su favor o de sus beneficiarios el derecho a recibir una serie de servicios asistenciales y/o prestacionales, destinados a compensar las consecuencias que de dicho acontecimiento se derivan, conforme con el artículo 1º de la Ley 776 del 2002.

Acorde con ello, la corporación precisó que es indispensable definir el accidente de trabajo, según el artículo 3º de la Ley 1562 del 2012, para saber cuándo se está frente al mismo. Al respecto afirmó que:

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o siquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo, y el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador, entre otros eventos.

Al respecto, la providencia recordó que la Corte

Defensa judicial



Suprema de Justicia ha señalado que quien pretenda liberarse de la responsabilidad generada por un accidente de trabajo tiene la carga de probar la falta de causalidad entre el hecho generador del daño y el ámbito laboral.

Procedimiento para determinar origen del accidente

Sumado a lo anterior, el alto tribunal constitucional señaló que en un Estado social de derecho el debido proceso es exigible tanto para las entidades estatales como para las privadas, independientemente de la relación jurídica que exista entre las partes.

Ello, con el fin de proteger a las personas de aquellos actos arbitrarios e injustificados que atentan contra sus derechos fundamentales. Al respecto, destacó que el debido proceso constituye un medio garantista para la efectividad de los derechos fundamentales, imponiéndose como 'un medio para evitar su abuso'.

En tal virtud, el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo contempla como una de las obligaciones que surgen de la relación laboral el deber de proteger y brindar seguridad a los trabajadores, así como ellos deben informar al empleador de la ocurrencia de cualquier contingencia que afecte su salud física o síquica.

De igual forma, concluyó que, en virtud de las reglas del debido proceso administrativo, tanto los empleadores como las entidades adscritas al Sistema Integral de Seguridad Social deben respetar y cumplir los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico a la hora de calificar el accidente que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o siquiátrica, una invalidez o hasta la muerte, con

el fin de evitar actos abusivos, arbitrarios o injustificados que atenten contra sus derechos fundamentales o los de sus beneficiarios.

Finalmente, recordó que para que la muerte por accidente de trabajo sea cubierta por las entidades adscritas al sistema, como es el caso de las ARL, basta con que dicho accidente ocurra por causa o con ocasión del trabajo y, además, que el trabajador se encuentre afiliado a dicho sistema (M. P. Alberto Rojas Ríos).

Corte Constitucional, Sentencia, T-181, 10/06/2021.

La escogencia del régimen pensional debe ser libre y espontánea, so pena de sanción

Las administradoras de fondos de pensiones tienen el deber de brindar información a los afiliados usuarios del sistema. Posteriormente, deben ofrecerles asesoría y buen consejo y, finalmente, la doble asesoría, a fin de que estos puedan adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional, explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Igualmente, afirmó que este deber de información ha existido desde el inicio del Sistema General de Pensiones (1 de abril de 1994), por cuanto se encuentra plasmado en normas vigentes para la época. Desde entonces y hasta la fecha, ha sido un proceso de ajuste y refinamiento con el propósito de que los usuarios-afiliados tengan cada vez mayor acceso a una información que de suyo debe ser oportuna, veraz y transparente.

Así las cosas y con base en varias providencias del 2017 y 2019, la corporación enfatizó que la escogencia del régimen pensional debe ser libre y espontánea, so pena de sanción.

Defensa judicial

Obligaciones de las administradoras de pensiones

Del mismo modo, indicó que el aparente desinterés del potencial afiliado en indagar por las condiciones y características de cada uno de los regímenes pensionales no releva de ninguna manera a la administradora del fondo de pensiones del cumplimiento de brindar información con la calidad y oportunidad que se ha señalado en la ley y en la jurisprudencia.

Además, en la vida normal laboral de una persona es viable hacer varios traslados entre regímenes pensionales o entre administradoras, sin que ello signifique que la administradora pueda omitir, en cada ocasión, el suministro de la información a que está obligada, con la calidad y en la oportunidad debidas.

Entonces, la materialización de una adecuada asesoría debe conjugar con la comprensión de la información objetiva, la circunstancia subjetiva de cada afiliado y la asesoría externa, que conlleven a la toma de la mejor decisión en materia pensional.

Cabe precisar que este deber no se satisface solo con suscribir formularios con la leyenda impresa de que el acto es libre, voluntario y libre de presiones en cada una de las vinculaciones en que ello ocurra, sino con la evidencia de que la asesoría brindada es clara, comprensible y circunscrita a la situación particular del afiliado.

Ineficacia del traslado

Acorde con lo precedente, el alto tribunal de justicia afirmó que existe ineficacia de la afiliación para el traslado del régimen pensional cuando:

La insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado que impida su acceso a la prestación.

La simple suscripción del formulario no es suficiente, sino el cotejo con la información dada, la cual debe corresponder a la realidad (Lea: Si afiliado al fondo privado no escogió modalidad pensional puede pasarse al fondo público).

En los términos del artículo 1604 del Código Civil, les corresponde a las administradoras allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional. De no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993

Esta declaratoria de la ineficacia trae como efecto retrotraer la situación al estado en que se encontraba si el acto no hubiese existido, es decir, la sentencia que en tal sentido se dicta tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales (M. P. Luis Benedicto Herrera Díaz).

Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sentencia, SL-33492021 (88826), 28/07/2021.

Absuelven al Estado al configurarse culpa exclusiva de la víctima frente al caso de ciudadano arrollado por tren

Absuelven al Estado al configurarse culpa exclusiva de la víctima frente al caso de ciudadano arrollado por tren (Corte Suprema)

La Sección Tercera del Consejo de Estado analizó un recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de una acción de reparación directa interpuesta por un ciudadano que resultó lesionado en un accidente en una vía férrea cuando fue atropellado por un tren que transportaba carbón.

Defensa judicial



El accionante alegó falla del servicio por falta de señalización, inexistencia de un puente peatonal y mallas protectoras y porque el tren iba sin luces.

En esta oportunidad, el alto tribunal administrativo absolvió a las entidades demandadas (municipio de Bosconia, Empresa Colombiana de Vías-Ferrovías, Drummond y Ferrocarriles del Norte de Colombia) al configurarse la culpa exclusiva de la víctima al haberse probado que el su comportamiento negligente e imprudente del accionante fue la causa adecuada del daño.

Actividades peligrosas

En relación con el ejercicio de la conducción de vehículos automotores, precisó que ha sido tradicionalmente una actividad peligrosa, por lo que resulta aplicable la teoría del riesgo excepcional como un tipo de régimen de responsabilidad objetiva.

Igualmente, indicó que en estos eventos de actividades peligrosas el Estado solo puede exonerarse si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la culpa exclusiva de la víctima.

Acorde con el caso concreto, el artículo 58 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 del 2002) establece que los peatones no podrán cruzar por sitios no permitidos o transitar por el guardavía del ferrocarril. Entonces, la conducta de la víctima constituyó una violación al deber objetivo de cuidado al no prever los efectos nocivos de su comportamiento o al confiar negligentemente en poder evitarlos.

Según la providencia, esa conducta fue determinante para la ocurrencia del accidente,

pues se demostró que era irresistible e imprevisible, dado que por las condiciones en las que desarrolló su conducta, no era posible que se advirtiera con claridad su presencia en las vías del tren, lo cual impedía maniobras seguras que permitieran reducir la velocidad y evitar que fuera atropellado.

Así, se configuró culpa exclusiva de la víctima, lo cual exime a las demandadas de responsabilidad por el ejercicio de la actividad peligrosa que ejercían (C. P. Guillermo Sánchez Luque).

Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia, 20001233100020050233201 (41419), 19/11/2020.

Fuente: Legismovil – Boletín Oficial
Artículo 20

Elaboró: Carlos Alberto Aponte García- Contratista

Revisó: Dra. Martha Lucia Triana López - Asesor

Aprobó: Dr. Hugo Alejandro Jiménez Balcázar – Subdirector de
Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico